

CRONICA DEL MES

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

La injerencia de la administración Reagan en las decisiones políticas salvadoreñas se ha dejado sentir con mayor presión en este mes, de manera más fuerte y palpable en la política frente a los "escuadrones de la muerte", en menor grado publicitario ante un intento de golpe de Estado, y no se conoce hasta qué punto en la decisión de concluir la Constitución política y convocar a elecciones presidenciales.

La escalada de violencia desplegada por los "escuadrones" fue en ascenso durante el mes. Tras el secuestro de un catedrático de la Universidad Nacional, un gran cateo en la facultad de economía por la Policía Nacional ocasionó la muerte de un empleado que se arrojó a la calle desde una ventana, la captura de materiales y fuertes acusaciones contra la institución. El Ejército Anticomunista publicó un comunicado en el que anuncia la creación de su brazo político (el Partido de Liberación Nacional) y ofreció al FMLN el canje de tres supuestos comandantes del FAL (de todo un grupo que había caído en poder de la Policía Nacional) por los militares capturados por la guerrilla.

A la presión moral de Mons. Rivera, quien a su regreso del sínodo romano denunció la conexión de los escuadrones con la Fuerza Armada y ratificó su postura a favor del diálogo a pesar de las amenazas, se sumó la defensa que la Conferencia Episcopal (CEDES) hizo de Mons. Rivera y Mons. Rosa, así como la condena a la violencia imperante en el país. Sin embargo, la presión más eficaz fue la que la administración Reagan iría aumentando, como condición para mantener la ayuda, que forzó a que el Ministro de Defensa, Vides Casanova, los condenara enérgicamente; como un símbolo de esto habría que entender la negación de visa para EE.UU. a D'Aubuisson (que fortuitamente coincidió con la negación a Tomás Borge), así como las supuestas exigencias

de remover militares vinculados con los escuadrones y la amenaza de suspender la residencia en Miami a ciertos civiles que los apoyan. Sin embargo, la orden militar de finales del mes, aunque implicaba muchos cambios, se redujo a una rueda de caballitos en los puestos de mando y la justificación ofrecida fue la eficacia en el campo de batalla (pudiera tener algo que ver también con el rumor del golpe); a finales del mes también fue capturada una banda de secuestradores en la que había tres miembros de la seguridad de la Asamblea (uno de ellos exguardia somocista). Todo esto parece indicar que la disposición a cambios profundos y las exigencias externas, son más bien formales, incidirán en acusaciones a subalternos de poca importancia, pero la estructura represiva continuará en pie, como se pudo comprobar a fin de mes, cuando aparecieron varios cadáveres torturados en distintas poblaciones del país y el barquero que salvó la vida a los periodistas extranjeros que visitaron el lugar de la masacre de Copapayo fue secuestrado, apareciendo poco después asesinado.

Los fuertes rumores de un golpe de Estado fueron desmentidos tanto por el Presidente Magaña como por el Coronel Blandón; lo mismo hizo el general Jaime Abdul Gutiérrez (supuestamente implicado en ese o en otro golpe simultáneo), pero las aclaraciones hechas en medio de las más duras críticas y condenas al gobierno y a la conducción de la Fuerza Armada, más que una aclaración parecían la proclama preparada para el caso de que hubiera triunfado su movimiento. Que hubo algo más que rumores parece confirmarlo la súbita e inesperada visita al país de Iklé, Sánchez y E. Abrams (quienes probablemente no sólo presionaron contra los escuadrones), así como las continuas alusiones al golpe de parte de los diputados de distintos partidos en el debate sobre la fecha de las elecciones.

El otro asunto relevante en la política nacional es el proceso electoral. A pesar de que los artículos de la Constitución relacionados con la tenencia de la tierra no lograban ninguna votación mayoritaria y eran nuevamente postergados hasta el final, los demás artículos avanzaban a un ritmo desusado para concluir la Constitución antes de fin de año. Por su parte, el Consejo Central de Elecciones buscaba una agilización en la creación del registro electoral microfilmado los archivos municipales, pero a la renuncia de su presidente siguió la de su vicepresidente, Dr. Hasbún, y la amenaza de renuncia del primer vocal, Ing. Roberto Meza. A pesar de todo, en una acalorada sesión plenaria de la Asamblea, el PDC unido a ARENA y PAISA (con lo que obtenían una vasta mayoría), decidieron convocar a elecciones de presidente y vicepresidente de la República el día 25 de marzo de 1984. El resto de partidos lucharon inútilmente que las elecciones no se redujeran a los personeros del ejecutivo, sino a los nuevos diputados y alcaldes; al ser denegada esta tentativa, el partido triunfante en marzo encontrará una posible mayoría adversa en la Asamblea y en los municipios del país, por lo que su gestión se verá obstaculizada. En dicha sesión plenaria muchos de los que hicieron uso de la palabra, por distintos partidos, denunciaron reiteradamente el fraude en las elecciones de marzo de 1982, desmitificando con ello la propaganda gloriosa que se hiciera en aquella oportunidad.

En torno a toda esta problemática, y especialmente al régimen económico, se polarizaron aún más las distintas fuerzas políticas reconocidas oficialmente, las que se prodigaron en declaraciones. ARENA y la derecha se pronunciaron contra el proyecto de artículos que aseguraban la segunda fase de la reforma agraria, al tiempo que libraban una campaña contra FINATA. El presidente de ANEP, en la cena de unidad del sector productivo, instó a la unidad monolítica para defender sus intereses contra todo intento (incluido el comunitarismo democristiano). D'Aubuisson atribuyó la crisis actual, ante la Cámara de la Construcción, a la izquierda constituida por el comunismo internacional y sus lacayos democristianos. Por otro lado, AD, PDC, UPD y otra serie de agrupaciones gremiales y sociales realizaron los días 12 y 13 de noviembre un "Encuentro por la paz, la democracia y la justicia social en El Salvador", en el cual analizaron la situación actual de crisis, violencia, injusticia, etc. y se

comprometieron a luchar unidos por soluciones pacíficas y democráticas.

Por lo que respecta a la crisis económica del país, más que las continuas quejas y lamentaciones, bien sea de la empresa privada que deplora las malas cosechas y la exigencia de mayores salarios en las cortas por parte del FMLN, bien sea del INPEP que carece de los fondos requeridos para sus prestaciones, o bien sea de los sectores más populares que sienten la escasez y carestía de productos básicos (a pesar de los alimentos donados por el Programa Mundial de Alimentos), agravado últimamente por el cierre de la frontera con Guatemala para el comercio entre ambos países, se devela en el presupuesto nacional aprobado para 1984. El incremento de éste es inferior a los 24 millones de colones respecto al año anterior y el 22.8% se irá en obligaciones y pagos de la deuda pública, hasta el punto de que un 25% de los ingresos fiscales, según el ministro de hacienda, se destinará al pago de capital e intereses de la deuda pública, que ha aumentado en casi 104 millones de colones respecto a 1983. El ramo de defensa y seguridad pública, con un aumento respecto al año anterior del 36%, se lleva en este presupuesto ordinario el 23.3% del total, mientras que educación se ve reducido al 15.4% y salud pública al 8%. No se sabe si como una variante al actual impuesto de papel sellado y timbre (tal como lo propone hacienda), o como algo nuevo, se implantará para inicio de 1984 el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de un 14% lo cual ha despertado ya fuerte oposición en diversos sectores. En este contexto hay que entender la aprobación de aguinaldos para el sector público, pero limitado a un máximo de 500 colones, así como la prohibición de huelga y cese de labores de empleados públicos y municipales, hasta la posibilidad de militarizar dichos servicios, aprobada en el artículo 218 de la Constitución.

Aunque noviembre fue un mes de relativa calma en el accionar de la guerra, el FMLN realizó por lo menos 83 acciones armadas (destacando el departamento de Santa Ana con 16, el de Usulután con 12, el de San Vicente con 9, el de La Libertad con 8 y el de Cabañas con 7), de las que 15 fueron tomas de poblaciones, 53 acciones estrictamente militares y 15 de otro tipo. Como consecuencia causó 69 muertos a la Fuerza Armada (2 tenientes, 2 subtenientes, 2 sargentos, 2 cabos y 61 elementos de tropa), que si se suman a las de los cuerpos paramilitares se elevan a 88

muerdos, 98 heridos, 139 bajas, para un total de 325 "bajas", a las que hay que añadir 235 capturados. Según los informes del FMLN durante el mes "recuperaron" 329 armas largas, 3 cortas, 25 de apoyo, 12 radio-transmisores y unos 50.000 cartuchos. Las acciones militares de mayor relevancia fueron: la desarticulación de toda una compañía de La Unión en Anamorós, algo similar con otras tres compañías que custodiaban cerros en torno a Gotera, las tomas de Villa Victoria, Villa Dolores y nuevamente de Tejutepique en Cabañas, y dos fuertes ataques a San Lorenzo (San Vicente), punto estratégico para el plan CONARA, con lo que los optimistas informes a la Asamblea presentados por su coordinador, coronel Amaya Arévalo, parecen ponerse en cuestionamiento; al mismo tiempo fuertes contingentes del FMLN se han hecho presentes en las fincas del oriente del país, para exigir mejores salarios en las cosechas, así como una campaña de protección a los jóvenes que son reclutados a la fuerza para la institución militar, como hiciera en su tiempo el "indio" Anastasio Aquino. Todo esto explica que altos personeros norteamericanos se quejen de la baja eficiencia y moral de la Fuerza Armada, y la crisis que se da a su interior, la que de algún modo se deja entrever en los discursos del coronel Golcher y del general Vides Casanova del 4 de noviembre con ocasión de la graduación en la Escuela de Comando y Estado Mayor. Esa incapacidad y nerviosismo podría explicar la muerte del técnico italiano Arturo Ingenieros, por disparos de un retén militar en San Vicente, ante el que presumiblemente no se detuvo.

De parte de la Fuerza Armada se realizaron en el mes diversos operativos: el día 22 uno en San Jorge (norte de San Miguel) en el que dijo haber causado 200 muertos al FMLN; el 23 otro pequeño por Suchitoto; el 24 dos menores en el norte de San Vicente y de La Unión; y el 28 uno grande (3-6.000 efectivos) en el departamento de San Vicente, pero la guerrilla había escapado del lugar. Fue la represión oficial y clandestina la que subió a tal punto que provocó la reacción norteamericana: además del clima de terror entre la población civil urbana y rural, se reanudaron las masacres en el campo, donde el batallón Atlacatl se llevó a 150 personas del cantón Copapayo (Cabañas), asesinandolas masivamente, como pudieron constatar días más tarde periodistas extranjeros que naufragaron en el lago Suchitlán, a lo que el COPREFA aclaró que tanto las fosas comunes como las docenas de cada-

veres en el fondo del lago eran las bajas de la subversión a consecuencia del operativo de días anteriores; igualmente fueron denunciados bombardeos de la fuerza aérea en cantones de San Vicente, Chinameca y Ciudad Barrios, con muchas víctimas inocentes. Como resultado de todo ello, en el mes de noviembre perecieron 525 personas de la población civil (56 a manos de escuadrones y el resto por acciones de la Fuerza Armada: 354 en enfrentamientos y 100 en operativos militares), y fueron capturadas 67 personas de las que 23 se dieron por desaparecidas y el resto permanecía en cuarteles y cárceles; mientras que a la guerrilla no se le imputó ningún asesinato y sólo dos capturas (un jornalero y un militar).

En el ámbito internacional el mes de noviembre también estuvo preñado de acontecimientos. La invasión norteamericana a Granada todavía siguió suscitando, incluso al interior de EE.UU., diversas reacciones que obligaban a la administración a ir inventando nuevas justificaciones que eludían los verdaderos motivos. Mientras las declaraciones de Stone y Ungo aclaran que el diálogo de momento no tiene viabilidad práctica (y las mutuas inculpaciones o aperturas a un futuro no son más que excusas), EE.UU. intensifica la opción militar: se habla de una posible base militar norteamericana en La Unión; se continúa en la reestructuración del CONDECA como alternativa a Contadora, o como instrumento de posible agresión a Nicaragua y de intervención en El Salvador; continúan las operaciones monstruo en Honduras y ya se anuncian otras nuevas a continuación que incluyan a tropas de Guatemala y El Salvador, a la vez que el general Alvarez sin el menor sonrojo pide más operaciones militares y mayor vinculación defensiva con EE.UU. incluida una base permanente, lo que llevó al moderadísimo arzobispo de Tegucigalpa a pronunciarse contra la guerra. Por otro lado, un fuerte grupo de empresarios centroamericanos se reunieron en Miami con miembros de la comisión Kissinger y optaron y presionaron por la solución armada para el área. Weinberger declaró que la guerra en El Salvador va mal, lo cual le sirvió para solicitar más ayuda, a la vez que no descartó la posibilidad de una invasión a Nicaragua, y aunque el gobierno sandinista anunció una serie de pasos concretos en el campo de la democratización y de la amnistía política así como en el corte al apoyo a la izquierda salvadoreña, estos no fueron suficientes para la paranoia belicista de Washington, por más que el mismo Mons. Obando por primera vez se atrevió a criti-

car a los contrarrevolucionarios afirmando que la guerra es un mal peor a la situación actual en Nicaragua. En fin, el Presidente Reagan vetó la exigencia de certificación de progreso en el respeto a los derechos humanos en El Salvador como condición para continuar e incrementar la ayuda, y parece que la campaña contra los escuadrones no es más que una presión política para mostrar cierta mejoría aparente y así aumentar considerablemente la ayuda militar al gobierno.

Mientras en la ONU, EE.UU. y sus seguidores más cercanos se rasgaron las vestiduras porque Nicaragua intentó introducir en la agenda el caso de Centroamérica, aludiendo aquéllos que va contra el trabajo de Contadora; ésta sigue su lento caminar entre escollos y sin el espaldarazo definitivo de EE.UU., convocando a otra reunión con los cancilleres del área para aprobar el plan de 21 puntos. La asamblea general de la OEA entró en crisis por la inesperada renuncia de su secretario general, Alejandro Orfila, y no llegó a nada trascendental, como es lo normal, limitándose a apoyar a Contadora, pero sin atreverse a condenar a EE.UU. por la invasión a Grenada; esto hace resurgir voces cada vez más potentes que piden la supresión del organismo, o su sustitución por un parlamento latinoamericano u otra instancia más autónoma y representativa.

En Costa Rica renunció su canciller, del ala más de derecha del partido, en desavenencia con el Presidente Monge por lo de Grenada; el 17 de noviembre Monge leyó solemnemente la proclama de neutralidad perpetua y activa de su país; más silenciosamente se opuso también a la presencia en su frontera con Nicaragua de 1.500 ingenieros militares norteamericanos. Mientras tanto en Guatemala el régimen se va volviendo más represivo y van cayendo víctimas de la AID, de la universidad y de la Iglesia católica, hasta el punto de que el Congreso norteamericano cortó la ayuda militar y económica a ese país, produciendo fuertes reacciones antinorteamericanas oficiales.

Un mes, por consiguiente, en el que se evidencia una vez más quién manda y cómo, en el que se profundiza la alienación y la dependencia nacionales, mientras la racionalidad va perdiendo batalla tras batalla en aras de la irracionalidad militarista.

El mes de diciembre será como un resumen

del año que se cierra: crisis política, crisis militar e incluso crisis internacional.

Los partidos políticos habían aprobado mayoritariamente las elecciones presidenciales —excluyendo las de diputados y alcaldes— para el 25 de marzo de 1984. Esto les forzaba a precipitar los procedimientos, de modo que había que encontrar un pacto para aprobar los artículos conflictivos sobre la tenencia de la tierra, postergados una y otra vez. El 14 sostuvieron acalorados debates, pero ya ARENA, PAISA y PCN —junto con el PPS— tenían mayoría suficiente como para fijar la extensión máxima de tierra en 245 Has., abolir el congelamiento de tierras por tres años, para vender, dividir o modificar la propiedad, y terminar así definitivamente con la amenaza de la segunda fase, entonando el **requiem** por la reforma agraria. Los argumentos de la DC a favor de un límite en 100-150 Has. no eran más que el canto del cisne, mientras AD se mantenía de cuerpo presente.

El día 15 todos los diputados firmaron la Constitución Política, y en los discursos posteriores los voceros de cada partido formularon discursos de felicitación y moderación, hasta que el coronel Martínez Varela, vocero de ARENA, comenzó a acusar al PDC de traidor a la patria por múltiples razones, lo cual originó protestas airadas de los diputados de esa fracción y el abandono ruidoso de la sala, para que terminara el discurso y la sesión con un auditorio prácticamente vacío. El día 20 se tuvo el acto solemne de juramentación de todos los poderes bajo la nueva Constitución, tras el que D'Aubuisson anunció su renuncia prometida a la presidencia de la Asamblea. Como los diputados no van a elecciones, la Asamblea pasa de ser constituyente a legislativa, con los mismos representantes. La renuncia del presidente dio pie para que el PDC y PAISA dieran un "curulazo" y se apoderaran de la mesa directiva, nombrando como presidente de la Asamblea a la Dra. María Julia Castillo, primer vice-presidente a Rey Prendes, y los demás puestos se los repartieron ambos partidos, dejando tres para el resto, si los aceptaban, ya que ante la maniobra ARENA, PCN y PPS se habían retirado de la sesión airados; los de AD se mantuvieron de espectadores. En días sucesivos los disidentes se negaron a asistir en protesta, de modo que no se pudo obtener **quorum** para prorrogar el estado de sitio, lo que tuvo que hacer el consejo de ministros; a duras penas se logró a finales del mes prorrogar el decreto 207

(tercera fase de la reforma agraria) ante las presiones y amenazas de la UPD y no se sabía si el decreto 544 (sobre la congelación de salarios) seguía vigente o no.

La crisis política se manifiesta igualmente en el hecho de que a tres meses de las elecciones no se tenga todavía ni ley ni registro electorales. Ya a comienzos del mes AD en un desplegado titulado "fraude a las puertas", decía que la votación de 1982 fue "notoriamente inflada, al punto de que aquellas elecciones pueden ser calificadas como una de las más irregulares de nuestra historia", tras lo que presagiaba algo similar dada la situación y la carencia de tales mecanismos reguladores. Por su parte, los diversos partidos políticos realizaron sus convenciones para designar los candidatos a presidente y vicepresidente, e iniciaron sus campañas electorales en un clima "de altura" en el que no se abordan los problemas reales del país, sino que se limitan a mutuas acusaciones insultantes o a defenderse de las que reciben de los contrarios; todos atacan al PDC, mientras que éste sólo arremete contra ARENA.

La crisis política también se extiende a una de las organizaciones del FMLN, las FPL, donde primero se separó el Movimiento Obrero Revolucionario "Cayetano Carpio"; a finales del mes un grupo denominado "Frente metropolitano Clara Elizabeth Ramírez" se tomó 9 emisoras en la capital para difundir un mensaje en el que acusaban a la actual dirigencia de las FPL y propugnaban una línea independiente y consecuente, al tiempo que se desvinculaban del MOR; ambos fueron desautorizados por la dirigencia del FMLN y de las FPL en un comunicado radial.

Por otro lado, el capitán Avila, acusado de participación en el asesinato de Rodolfo Viera y de los dos asesores agrarios norteamericanos, así como de participación terrorista en Costa Rica, fue nuevamente capturado para someterlo a juicio, ante la protesta de sectores simpatizantes, de algunos vinculados con lo judicial y del mismo D'Aubuisson quien lo defendería, pese a lo cual no fue liberado, parece que por presiones norteamericanas. El GAS (Gremio Anticomunista Salvadoreño) emitió un comunicado en el que felicita a la Asamblea por haber concluido la Constitución y ratifica que la paz es sagrada y, por lo tanto, se logrará aunque con mucha sangre. En este ambiente, es lógico que el diálogo, o cualquier otra salida política no tenga la menor resonancia y estén estancados.

En lo económico la crisis continúa con toda su agudeza, incrementada por el cierre de la frontera con Guatemala, que hace escasear y encarecer muchos productos. Los aguinaldos de navidad aunque recortados, dinamizaron la actividad económica; pese a ello el movimiento de ventas se redujo respecto a otros años. Algunas empresas, sobre todo constructoras, paralizaron las obras durante el mes para no tener que pagar aguinaldos. Sin embargo, la alegría de fin de año se desbordó en las casas y calles, a pesar de los prolongados apagones de electricidad por sabotaje, incluso en la capital.

La crisis militar se agudizó durante el mes, pues el FMLN tuvo actividades de mayor envergadura. El día 13 atacó y tomó el cerro Cahuatique, ya conquistado anteriormente y re-fortificado, con una periferia de seguridad cubierta por unos 3.000 soldados; causó 144 bajas al ejército (60 muertos, 75 heridos, 9 prisioneros), tuvo 13 muertes (entre ellas un comandante) y recuperó gran cantidad de armas y municiones; la fuerza aérea bombardeó la zona 11 horas. Un gran operativo montado en la región fue atacado en la retaguardia, y el FMLN se tomó Ciudad Barrios, causando la muerte a 60 soldados, docenas de heridos y 16 prisioneros; siguió un bombardeo en la zona, pedido por el comandante de tierra, que causó la muerte de unos 200 civiles; la Fuerza Armada no permitió el acceso a los periodistas. El día 30 de diciembre, en las primeras horas de la madrugada, el FMLN atacó las guarniciones de Chalatenango, San Rafael y otros lugares circundantes, pero el objetivo era el cuartel de la 4a. Brigada de Infantería, en El Paraíso (Chalatenango), al que atacaron con artillería, se lo tomaron y mantuvieron por casi un día, dinamitaron los polvorines, se llevaron armas, municiones y demás implementos y sólo les faltó esparcir sal sobre las ruinas para que fuera un pasaje bíblico. El comandante, coronel Morales Ruiz, no estaba (o se escapó, según rumores), siendo relevado y puesto fuera de servicio más tarde. Murió el segundo comandante, teniente coronel Vaquerano y unos 40 oficiales y clases, según el parte del FMLN; tal vez unos 340 soldados que fueron enterrados en fosas comunes (testigos en Chalatenango vieron enterrar a unos cien y dicen que en otros dos sitios hicieron otro tanto; incluso puede ser que los 107 cadáveres encontrados más tarde por Santa Rita fueran soldados, y no guerrilleros, como diría COPRE-FA); fueron capturados unos 200 soldados (entre

ellos el capitán Hidalgo y su esposa) junto con una docena de oficiales y clases. De estos dejaron en libertad al retirarse a unos 58 que estaban heridos. Días más tarde entregaron a 125 más a la Cruz Roja Internacional. En esta ocasión tampoco permitió la Fuerza Armada que los periodistas se acercaran al cuartel, pero algunos lograron penetrar desde terrenos controlados por el FMLN. Para concluir el año, a las cero horas del amanecer del 1 de enero de 1984 el FMLN atacó las guarniciones del puente Cuscatlán, el único en pie y el primero en ser construido para automotores sobre el río Lempa, y lo destruyó completamente, dejando aislado el oriente del país; simultáneamente averió la subestación de salida de la recién inaugurada presa hidroeléctrica "15 de Septiembre" dejando sin energía al oriente del país; en la acción causó la muerte de un oficial y unos pocos soldados.

Durante el mes el FMLN realizó 124 acciones (21 en el departamento de Chalatenango, 19 en los de San Salvador y San Vicente, 13 en el de Usulután, 11 en el de San Miguel y 10 en el de Santa Ana), de las que 26 fueron tomas, 75 estrictamente militares y 23 de distinto tipo; las 15 de sabotaje afectaron principalmente a la electricidad (11), al ferrocarril (dinamitaron un tren en Usulután y volaron parte de la vía férrea), a la estación de microondas de Cacahuatique y a la cosecha de caña de azúcar. Causaron por lo menos 219 muertes a la Fuerza Armada (1 teniente coronel, 1 capitán, 3 tenientes, 7 subtenientes, 1 sargento, 2 subsargentos, 2 cabos, 7 pilotos y el resto fuerzas de tropa), cifra que se puede elevar a cerca de 500 si se confirmaran las bajas de El Paraíso (y sin contar los del puente Cuscatlán), además de cerca de 200 heridos y otros 225 prisioneros; pero si se añan Fuerza Armada y cuerpos paramilitares, resultarían 419 muertos (que se pueden elevar a 700), 288 heridos y otras 36 bajas, para un total de 743 a mil "bajas". Además capturaron 2 armas cortas, 387 largas, 67 de apoyo con sus proyectiles, 33 radios de transmisión y muchos miles de municiones; también destruyeron en El Paraíso 3 tanquetas, 2 camiones mazzinger, 5 transportes militares, 10 vehículos de los oficiales y dañaron 5 helicópteros.

Por su parte la Fuerza Armada realizó en el mes tres operativos de importancia: uno en Usulután, los días 6-8, en el que habría tenido 18 muertos y 75 soldados heridos; otro en Morazán, con unos 3.000 hombres (que luego se extendió al

norte de San Miguel y a Usulután, para perseguir al FMLN tras lo de Cacahuatique), entre los días 15 y 22, en el que reconoció 60 bajas y dijo haber causado 100 al FMLN (cosa que éste desmintió, como es lógico); en el de San Miguel (en las mismas fechas, como ya se indicó), de los 1.500 soldados la Fuerza Armada aceptó 25 muertos y 35 heridos. En total, el FMLN podría haber tenido en el mes de 100 a 113 muertos en dichas acciones.

Por lo que hace a la represión sobre la población civil, en el mes de diciembre se contabilizaron 504 muertos a manos de grupos militares o conexos, a los que tal vez haya que agregar algunos centenares por los bombardeos; a la guerrilla no se le imputó ninguno. También fueron capturados 37 individuos, frente a uno por la guerrilla.

Recapitulando los datos más importantes de la violencia durante el año de 1983, de acuerdo a lo informado mes a mes en esta "crónica", la población civil ha soportado un saldo de por lo menos 5.380 víctimas violentas, pero que ya para el 15 de diciembre, según la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, se elevaba a 6.096 asesinados (4.736 de ellos por la Fuerza Armada), y otras 976 personas fueron capturadas; mientras que el FMLN asesinó a unas 66 personas y capturó otras 32 durante el año. La Fuerza Armada tuvo de 1.293 a 1.593 muertos en sus filas (1 teniente coronel, 7 capitanes, 16 tenientes, 44 subtenientes, 40 sargentos, 18 subsargentos, 39 cabos, 13 pilotos y de 1.115 a 1.415 soldados), además de por lo menos 1.653 capturados; pero que si le agregamos los paramilitares, arrojan las cifras de 2.360 muertos, 1.779 heridos, y otras 1.298 bajas, cuando menos, para un total que supera las 5.434 "bajas" (número superior al de la población civil, probablemente). Por su parte, el FMLN puede haber tenido 742 muertos en sus filas y otras 508 bajas, para un total de 1.250 "bajas" (que por supuesto, en su mayoría, no son reconocidas). La Fuerza Armada realizó en el año de 1983 unos 13 operativos grandes, 29 medianos, 10 pequeños y un sinnúmero de cateos y registros en las ciudades; también se ha dado publicidad a cuando menos el reclutamiento de 5.750 soldados y cerca de 800 cadetes, cifras que de no ser mayores no bastarían para reponer las "bajas" y licencias. El FMLN realizó en el año arriba de 2.350 acciones (611 de sabotaje, 1,328 estrictamente militares, y el resto de diversa índole); recuperó 18 armas cortas, 3.596 largas,

199 de apoyo con abundante parque, 92 radio transmisores de campaña y unos 300.000 cartuchos de distintos calibres, averió 4 aviones de combate y 7 helicópteros y destruyó 38 vehículos militares (además de los 10 carros de oficiales en El Paraíso).

La crisis internacional, en lo que al área le puede afectar, se refleja en la campaña que el gobierno de EE.UU. sigue intensificando contra los escuadrones de la muerte y sus fautores. El vicepresidente Bush, en su visita a El Salvador, parece ser que entregó dos listas, una de militares y otra de civiles, vinculados con ellos, y pidió al gobierno y a la Fuerza Armada que para el 10 de enero deberían estar fuera del país, si se quería continuar recibiendo la ayuda económica y militar, tanto más cuanto que Reagan se propone solicitar del Congreso un incremento adicional superior a los 200 millones de dólares para 1984, y el informe Kissinger propondrá una sustancial ayuda en cierto modo condicionada a la mejora en los derechos humanos; aparte de que la próxima campaña electoral en EE.UU. requerirá una mejor imagen en la política exterior hacia Centroamérica. Aunque oficialmente se haya negado la existencia de tales listas y la petición, todo parece indicar que es algo más que palabras, para justificar la política norteamericana de la guerra; la captura del capitán Avila y la extradición de dos militares de alto rango parecerían confirmarlo. Por su parte, representantes de la comisión Kissinger volvieron a visitar la región, y R. Stone, después de su viaje a Europa en busca de apoyo, acortó su estancia en Bogotá para acudir urgentemente a Washington. El grupo de Contadora sostiene reuniones para lograr que los países del área aprueben el documento de 21 puntos y detener la guerra.

Mientras en Honduras continúan las operaciones "Pino Grande II", se profundiza la dependencia, se habla de una base militar norteamericana permanente y se hostiga sin cesar a Nicaragua, ya se está anunciando una tercera operación militar conjunta a partir de mediados de 1984, con participación de los ejércitos de Guatemala y El Salvador, en las proximidades de las fronteras de Honduras con estos dos países.

Sin embargo, a nivel latinoamericano la correlación de fuerzas puede modificarse, especialmente con el ascenso al poder de Raúl Alfonsín en Argentina y por su decisión de llevar a los tribunales a los militares causantes de la represión que costó la vida a varias docenas de millares de personas civiles, por su incompetencia en la guerra de Las Malvinas y por su incapacidad y corrupción económica; muy por los suelos tiene que estar el prestigio de los militares argentinos y muy graves deben ser los cargos y las pruebas, para que se sometan a la ley sin reaccionar violentamente. Al mismo tiempo, el desbordante triunfo del socialdemócrata Lusinchi en Venezuela indudablemente reforzará su posición en Contadora y tomará distancia del gobierno salvadoreño en caso de que Duarte ganara las elecciones.

Un mes, en conclusión, que resume bastante bien la tónica del año que termina, y que puede representar un augurio del que se inicia inmediatamente, en el que las elecciones (salida política impuesta por la fuerza desde EE.UU.) mostrarán nuevamente su absoluta impotencia para resolver los problemas fundamentales de El Salvador, la guerra, la división del poder, la subordinación de las instancias políticas a las militares y a las decisiones de la Casa Blanca.

Eugenio C. Anaya, h.